



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN SALA

SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, enero treinta y uno (31) de dos mil veintitrés (2023)

REFERENCIA:	INCIDENTE DE DESACATO - SEGUNDA INSTANCIA - CONSULTA
AFECTADO:	REINALDO DE JESÚS LÓPEZ CASTAÑO
ACCIONADA:	UARIV
RADICADO:	05001-31-05-007- <u>2022-00375-02</u>
ACTA N°:	003

La Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los magistrados **ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ**, **DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN** y **MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**, procede a decidir de plano mediante el presente proveído el grado jurisdiccional de consulta surgido con ocasión de la decisión adoptada en el incidente de desacato incoado por el señor **REINALDO DE JESÚS LÓPEZ CASTAÑO** en contra de la **UARIV**, por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito Judicial de Medellín.

El expediente llegó al Tribunal Superior de Medellín, por remisión que hizo el Juzgado del conocimiento para que se surtiera el trámite de la Consulta. A continuación, la Sala, previa deliberación sobre el asunto, como consta en el **acta 003** de discusión de proyectos, adoptó el presentado por la ponente, el cual quedó consignado en los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES FÁCTICOS

El señor REINALDO DE JESÚS LOPEZ CASTAÑO interpuso acción de tutela en contra de la UARIV, por considerar que se le estaban vulnerando múltiples derechos fundamentales. El trámite tutelar concluyó con sentencia de segunda instancia en la cual se REVOCÓ la de primera, y se CONCEDIÓ el amparo, en consecuencia de ello se ordenó a la accionada¹

¹ PDF 03 titulado "Sentencia del TSM".

RADICADO 05001-31-05-007-2022-00375-02

“(…) **SEGUNDO: ORDENAR** a la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS – UARIV-, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia emita una respuesta de fondo a la petición radicada por el accionante el pasado **2 de agosto de 2022**, conforme el análisis efectuado en la parte motiva de esta providencia.”

En la parte motiva de la decisión se indicó:

“(…) El señor LÓPEZ CASTAÑO solicitó el **2 de agosto de 2022** el reconocimiento de indemnización administrativa por el hecho victimizante de desplazamiento forzado de manera integral, para todos los miembros del núcleo familiar como beneficiarios, invocando las sentencias T 450- 2019, T 347-2018, el artículo 13 de la Constitución Política, señalando que no basta con el reconocimiento mediante resolución porque con ello no se le repara, por lo que solicita la efectividad con la garantía y prevalencia del derecho sustancial con el pago efectivo para todos los beneficiarios¹

UNIDAD DE VÍCTIMAS
COMITÉ DE REPARACIONES
A SU DIRECTOR TÉCNICO DE REPARACIONES O
QUIEN HAGA SUS VECES

Asunto: SOLICITO CUMPLIMIENTO CABAL A LA
INDEMNIZACIÓN POR Desplazamiento Forzado

Referencia Derecho de Petición Artículo 23 y 29 C.N.
ley 1753 de 2015. Servicios Postales Nacionales S.A. 06 AGO 2022 PUNTO DE VENTA - CAFETERO

Yo, Rosendo López Castaño, 3000 COPIA COTEJADA CON EL ORIGINAL
Identificada (o) con cedula de ciudadanía
Nº 3603023 de Santo Domingo,
ejerciendo el derecho de petición consagrado en el Art. 23
de la C.N., aplicación y garantía del Cumplimiento de los
principio constitucionales y legales de carácter general por
medio de este instrumento con el objeto que sean
garantizados nuestros derechos fundamentales; solicito
las acciones necesarias con fines que se haga efectiva
esta indemnización por el hecho victimizante de
Desplazamiento Forzado de
manera integral, es decir para todos los miembros del
núcleo familiar como beneficiarios, aun los menores de

La entidad emitió una respuesta el **28 de septiembre de 2022** en la que se le informó²:

“En atención a lo dispuesto en artículo 14 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que está en concordancia con la Ley Estatutaria 1755 de 2015, la Unidad para las Víctimas le brinda una respuesta bajo el contexto normativo de la Resolución No. 01049 del 15 de marzo de 2019, *“por medio de la cual se adopta el procedimiento para reconocer y otorgar la indemnización por vía administrativa, se crea el método técnico de priorización, se derogan las Resoluciones 090 de 2015 y 01958 de 2018, y se dictan otras disposiciones.”*

En el presente caso, la Unidad se encuentra realizando todas las validaciones necesarias para verificar si es procedente reconocer la medida de indemnización administrativa, por lo que en un término prudencial se les informara si hace falta algún documento o si ya terminó en la ruta en la cual se encuentra enmarcada, para brindarle una respuesta de fondo respecto de la entrega de la indemnización por el hecho victimizante de **desplazamiento forzado**.

Por último, es pertinente aclararle que los montos y orden de entrega de la medida de indemnización administrativa depende de las condiciones particulares de cada víctima, del análisis del caso en concreto y la disponibilidad presupuestal anual con la que cuente la Unidad, de igual forma, es preciso indicar que solo se realizará la entrega de la medida a las personas que resulten priorizadas para cada vigencia

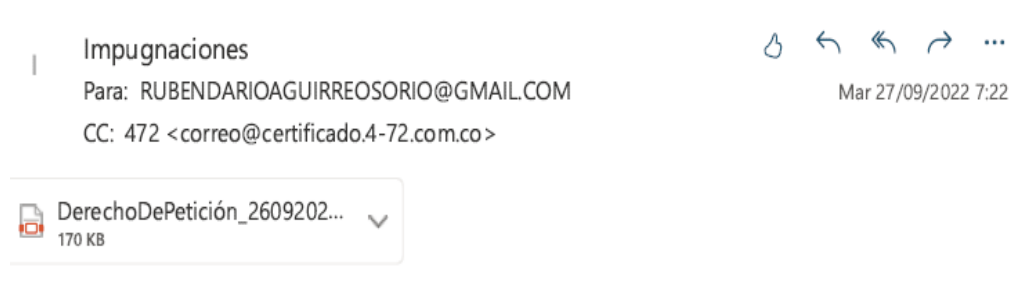
¹ PDF 02- Escrito tutela- página 2

² PDF 05 Respuesta UARIV – páginas 12 a 16

RADICADO 05001-31-05-007-2022-00375-02

de acuerdo con la aplicación del Método Técnico de Priorización. Finalmente, la entrega de la indemnización administrativa depende de que se cuente con un estado de inclusión en el Registro Único de Víctimas".

La respuesta fue remitida a la dirección electrónica informada en la solicitud, que coincide con la que se indicó en el escrito con el que se inicia este proceso constitucional: RUBENDARIOAGUIRREOSORIO@GMAIL.COM³



Pues bien, a partir del análisis efectuado en el **acápito 2.2. de esta providencia**, y observando el contenido de la respuesta emitida, esta corporación encuentra que no constituye una respuesta clara y de fondo por lo siguiente:

Para esta corporación son claros los parámetros definidos en la Resolución N° 01049 del 15 de marzo de 2019 con la que la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación a las Víctimas implementó el procedimiento para el reconocimiento y pago de la indemnización administrativa, que consta de cuatro (4) fases. A saber: **(i)** solicitud; **(ii)** análisis de la solicitud; **(iii)** respuesta de fondo a la solicitud y; **(iv)** entrega de la indemnización.

Y no queda duda que el caso del señor **LÓPEZ CASTAÑO** se encuentra en la **FASE DE RESPUESTA DE FONDO A LA SOLICITUD** y que de acuerdo con lo previsto en el **artículo 11** de tal acto administrativo la Unidad cuenta con un término de **ciento veinte (120) días hábiles para resolver de fondo la solicitud**, al cabo del cual, la Dirección Técnica de Reparación deberá emitir un acto administrativo motivado en el cual se reconozca o niegue la medida; decisión que deberá notificarse a la víctima y frente a la cual procederán los recursos en los términos y condiciones establecidos en la Ley 1437 de 2011. (...)"

"(...) Pero revisando el contenido de la respuesta emitida el **28 de septiembre de 2022**, la Sala concluye que lo informado es vago e indeterminado, no contiene argumentos de fácil comprensión resultando así imprecisa e incongruente, porque si bien hace referencia de manera genérica a la Resolución No. 01049 del 15 de marzo de 2019 nombrándola, finalmente no pone en conocimiento del actor el trámite con sus diferentes fases, ni mucho menos informa sobre el plazo **de 120 días hábiles** con el que la UARIV cuenta para emitir el acto administrativo motivado con el que se reconozca o niegue la medida. Solo se le indica de manera vaga que *"en un término prudencial se les informara si hace falta algún documento o si ya termino en la ruta en la cual se encuentra enmarcada"*, lo que sin duda deja al accionantes y su grupo familiar sin claridades sobre los términos de respuesta. Tampoco se informa sobre los documentos y certificados que debe allegar conforme con la Circular 009 de 2017 de la Superintendencia de Salud y la Resolución 0113 de 2020 del Ministerio de Salud en caso de encontrarse en una situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad consagrados en el artículo 4 de la Resolución No. 01049 del 15 de marzo de 2019 y primero de la Resolución 582 de 2021.

Es el conjunto de consideraciones precedente el que llevará a la Sala a REVOCAR la providencia que se revisa y tutelar la protección del **derecho fundamental de petición** del señor **REINALDO DE JESÚS LÓPEZ CASTAÑO** respecto de la solicitud por él radicada

³ PDF 05Respuesta UARIV – páginas 11

RADICADO 05001-31-05-007-2022-00375-02

el pasado **2 de agosto de 2022**.

El accionante, impetró el incidente de desacato que ahora es objeto de análisis judicial, indicando que la accionada no ha cumplido con la orden de tutela².

La Juez de instancia, inició el trámite incidental agotando el respectivo procedimiento, y como no encontró que se hubiese cumplido en su totalidad con la orden de tutela, decidió abrir el incidente de desacato y sancionar a la señora CLELIA ANDRA ANAYA BENAVIDES en su calidad de Directora de reparaciones y superiora jerárquica la Dra. MARÍA PATRICIA TOBÓN YAGARÍ en calidad de Directora General, con multa de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales a cada una⁴.

2. CONSIDERACIONES

Pues bien, para efectuar el análisis debe la Sala partir de una premisa: es claro que el incidente de desacato es un mecanismo de coerción con el que cuentan los jueces en desarrollo de sus poderes disciplinarios, por ello está amparado por los principios del derecho sancionador, otorgándosele garantías al disciplinado. De esta manera, en el desarrollo del desacato siempre será necesario demostrar la responsabilidad subjetiva en el incumplimiento del fallo de tutela, siendo claro que el solo incumplimiento del fallo no da lugar a la imposición de la sanción, porque es necesario que se pruebe la negligencia o el dolo de la persona que debe cumplir la sentencia de tutela.

Así mismo, la Corte Constitucional en sentencia **C-367 de 2014**, indicó que las autoridades judiciales que deciden un incidente de desacato, deben verificar una serie de requisitos, así:

“(…)” **4.3.4.8.** El trámite de cumplimiento sigue el procedimiento previsto en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, que otorga amplios poderes al juez de tutela para hacer cumplir la sentencia, valga decir, para garantizar el cumplimiento material y objetivo de la orden de protección de los derechos amparados. Hay tres etapas posibles en el procedimiento para cumplir con el fallo de tutela: (i) una vez dictado, el fallo debe cumplirse sin demora por la persona a la que le corresponda; (ii) si esta persona no lo cumpliere dentro de las 48 horas siguientes, el juez se debe dirigir al superior de esta persona para que haga cumplir el fallo y abra un proceso disciplinario contra ella; (iii) si no se cumpliere el fallo dentro de las 48 horas siguientes, el juez “ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiera procedido conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo”.

² PDF 01 titulado “Presentación incidente desacato 22nov22”

⁴ PDF 18 titulado “Auto Sanción Ordena remitir al TSM Incidente de Desacato (E2)”.

RADICADO 05001-31-05-007-2022-00375-02

4.3.4.9. De no cumplirse el fallo, entre otras consecuencias, la persona puede ser objeto del poder jurisdiccional disciplinario, que se concreta en el incidente de desacato. Este incidente sigue un procedimiento de cuatro etapas, a saber: (i) comunicar a la persona incumplida la apertura del incidente del desacato, para que pueda dar cuenta de la razón por la cual no ha cumplido y presente sus argumentos de defensa; (ii) practicar las pruebas solicitadas que sean conducentes y pertinentes para la decisión; (iii) notificar la providencia que resuelva el incidente; y (iv) en caso de haber lugar a ello, remitir el expediente en consulta al superior. Para imponer la sanción se debe demostrar la responsabilidad subjetiva del sancionado en el incumplimiento del fallo, valga decir, que éste es atribuible, en virtud de un vínculo de causalidad, a su culpa odolo"(...)".

Además, ha indicado la Corte Constitucional que dentro del incidente de desacato se indaga al obligado por el cumplimiento de la sentencia por las acciones ejercidas, por tanto, la responsabilidad exigida es objetiva (satisfacción plena de lo ordenado), pero para la imposición de las sanciones por desacato, habrá de develarse la demostración de una responsabilidad subjetiva. Al respecto son pertinentes de la sentencia T- 271 de 2015, así:

Asimismo, la Corte ha manifestado que la sanción que puede ser impuesta dentro del incidente de desacato tiene carácter disciplinario, dentro de los rangos de multa y arresto, resaltando que, si bien entre sus objetivos está sancionar el incumplimiento del fallo de tutela por parte de la autoridad responsable, ciertamente lo que se busca lograr es el cumplimiento efectivo de la orden de tutela pendiente de ser ejecutada y, por ende, la protección de los derechos fundamentales con ella protegidos

En el trámite del desacato siempre será necesario demostrar la responsabilidad subjetiva en el incumplimiento del fallo de tutela. Sobre el particular esta Corporación ha señalado:

“30.- Así mismo, el juez de tutela al tramitar el respectivo incidente tiene el deber constitucional de indagar por la presencia de elementos que van dirigidos a demostrar la responsabilidad subjetiva de quien incurre en desacato, por tanto dentro del proceso debe aparecer probada la negligencia de la persona que desconoció el referido fallo, lo cual conlleva a que no pueda presumirse la responsabilidad por el sólo hecho del incumplimiento. De acuerdo con ello, el juzgador tiene la obligación de determinar a partir de la verificación de la existencia de responsabilidad subjetiva del accionado cuál debe ser la sanción adecuada – proporcionada y razonable – a los hechos “ 4

31.- De acuerdo con las anteriores consideraciones se tiene que, al ser el desacato un mecanismo de coerción que surge en virtud de las facultades disciplinaria de los jueces a partir de las cuales pueden imponer sanciones consistentes en multas o arresto, éstas tienen que seguir los principios del derecho sancionador. En este orden de ideas, siempre será necesario demostrar que el incumplimiento de la orden fue producto de la existencia de responsabilidad subjetiva por parte del accionado, es decir, debe haber negligencia comprobada de la persona para el incumplimiento del fallo, quedando eliminada la presunción de la responsabilidad por el sólo hecho del incumplimiento.

32.- En este punto cabe recordar que, la mera adecuación de la conducta del accionado con base en la simple y elemental relación de causalidad material conlleva a la utilización del concepto de responsabilidad objetiva, la cual está prohibida por la Constitución y la Ley en materia sancionatoria. Esto quiere decir que entre el comportamiento del demandado y el resultado siempre debe mediar un nexo

⁴ T- 1115 de 2005

causal sustentado en la culpa o el dolo.”⁵Subrayas fuera de texto).

En consonancia con lo anterior, la Corte ha precisado que en el momento de analizar si existió o no desacato deben tenerse en cuenta situaciones especiales que pueden constituir causales exonerativas de responsabilidad aclarando que no puede imponerse sanción cuando: “(i) la orden impartida por el juez de tutela no ha sido precisa -porque no se determinó quien debe cumplirla o su contenido es difuso y, (ii) cuando el obligado de buena fe quiere cumplir la orden pero no se le ha dado la oportunidad de hacerlo (sentencias T-1113 y T-368 de 2005)”

Es así como como **el elemento subjetivo** se refiere a un **obrar negligente del funcionario encargado de dar cumplimiento a la orden de tutela**, por ello es necesario, además de identificar el sujeto destinatario de la orden de tutela, **analizar cuál ha sido la conducta tendiente a su satisfacción** en los mismos términos que fue declarada por el Juez.

En cuanto a la imposición de la sanción, en sentencia **C- 092 de 1997** se estableció que ella es un reflejo del poder administrativo disciplinario del juez de tutela que persigue el cumplimiento efectivo y oportuno de las órdenes de tutela, así indicó:

“... puede concluirse que la sanción por el desacato a las órdenes dadas por el juez de tutela es una sanción que se inscribe dentro de los poderes disciplinarios del juez, pues su objetivo es el de lograr la eficacia de las órdenes proferidas tendentes a proteger el derecho fundamental reclamado por el actor”

Ahora bien, en lo referente a la elección y cuantificación de la sanción, debe verificarse que esta sea justa, equitativa y adecuada al propósito dispuesto, toda vez que la sanción será legítima en la medida que sea proporcionada y necesaria para salvaguardar derechos fundamentales. Es por ello que, el juez al momento de tasar la medida correccional debe moverse dentro los rangos legales, atendiendo a criterios de razonabilidad y aplicando las reglas de la experiencia, para que la sanción a imponer no resulte desproporcional a la actitud del funcionario incumplido. (ver sentencia T- 512 de 2011 de la Corte Constitucional).

Pues buen, verificado entonces el respeto del procedimiento previo en este trámite conforme lo previsto en el Decreto 2591 de 1991 y en los precedentes constitucionales sobre la materia, se concluye lo siguiente:

Es claro que, cuando se emitió la orden de tutela, la solicitud del accionante estaba en la fase de respuesta de fondo, es decir, no se había emitido acto administrativo motivado en el cual se negará o reconociera la medida, sin embargo, de acuerdo a la

⁵ T – 171 de 2009

⁶ T- 171 de 2009

RADICADO 05001-31-05-007-2022-00375-02

documentación aportada en el presente trámite incidental se advierte por esta corporación que esa etapa se encuentra superada; al actor se le reconoció la medida que será entregado entre el mes de **mayo y junio de 2023**. Decisiones que fueron notificadas al correo electrónico relacionado para esos efectos rubendarioaguirreosorio@gmail.com señalando entre otros:

"En atención a su solicitud y conforme a lo dispuesto en artículo 14 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que está en concordancia con la Ley Estatutaria 1755 de 2015, la Unidad para las Víctimas le brinda una respuesta bajo el contexto normativo del artículo 185 y siguientes de la Ley 1448 de 2011 y la Resolución No. 01049 del 15 de marzo de 2019, "por medio de la cual se adopta el procedimiento para reconocer y otorgar la indemnización por vía administrativa, se crea el método técnico de priorización, se derogan las Resoluciones 090 de 2015 y 01958 de 2018, y se dictan otras disposiciones", que en conjunto definen el procedimiento de reconocimiento y entrega de la indemnización administrativa para los hechos susceptibles de esta medida. En atención a la petición presentada, relacionada con el otorgamiento de la medida de indemnización administrativa por el hecho victimizante de Desplazamiento Forzado con radicado 4523-22748, la Unidad para las Víctimas le informa que luego de verificar el Registro Único de Víctimas, Usted presentó solicitud de indemnización administrativa. **En virtud de lo anterior, una vez consultados los registros administrativos, la Entidad ha identificado que usted ya aportó los documentos y datos requeridos para adelantar el procedimiento de pago de la medida de indemnización administrativa, por lo que nos permitimos informarle que se programa pago para REINALDO DE JESUS LOPEZ CASTAÑO, en el mes de Mayo de 2023 cuya dispersión de recursos será el último día hábil de este mes y su respectiva notificación del pago de la medida de indemnización se llevara a cabo en el transcurso del mes de Junio de 2023. (...)"**⁷ (negrillas fuera de texto)

Siendo, así las cosas, es claro que para el momento en que se profiere esta providencia no se acredita el incumplimiento que se endilga, por lo que se impone REVOCAR la decisión que se revisa.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **RESUELVE:**

PRIMERO: REVOCAR la sanción impuesta por el Juez Séptimo Laboral del Circuito de Medellín mediante providencia del pasado **veintitrés (23) de enero de 2023**, en la cual decidió el incidente de desacato en el que es afectada el señor **REINALDO DE JESÚS LOPEZ CASTAÑO**, sanción impuesta en contra de la señora CLELIA ANDRA ANAYA BENAVIDES en su calidad de Directora de reparaciones y su superiora jerárquica la Dra. MARÍA PATRICIA TOBÓN YAGARÍ en calidad de Directora General.

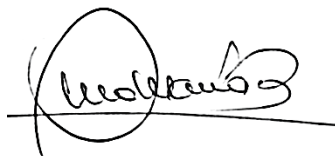
⁷ Carpeta Segunda instancia, pdf 3 "RespuestaUarivEnSegundaInstancia" Pág. 7

RADICADO 05001-31-05-007-2022-00375-02

SEGUNDO: Notifíquese lo decidido a las partes y a la señora Procuradora Regional.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -
HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó
por estados N ° 016 del 02 de FEBRERO de
2023

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>

RADICADO 05001-31-05-007-2022-00375-02

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE
CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
estados N ° 57 del 1 de ABRIL de 2022

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/130>